



ARGENTINA: INFORME 2020 SOBRE LA LIBERTAD DE CULTO

Resumen

La constitución y las leyes disponen la libertad de culto y el derecho a practicar libremente la propia religión. La constitución también otorga condición jurídica preferencial a la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero no hay religión oficial de Estado. Varias congregaciones religiosas siguieron expresando frustración ante el requisito estatal de que los grupos religiosos se tengan que inscribir como asociaciones civiles a fin de reunir las condiciones para la exención impositiva, recibir visados para funcionarios religiosos extranjeros y celebrar actividades públicas y observaron que la Iglesia Católica estaba exenta de este requisito. Asimismo, respecto de la resolución expedida en el mes de agosto por la Inspección General de Justicia (IGJ) por la que se exigía a todas las asociaciones civiles, incluidas las congregaciones religiosas, una composición que respete la diversidad de género en sus órganos de administración y fiscalización, expidieron críticas por considerarla inconstitucional y un quebrantamiento de la libertad de culto. Las restricciones impuestas por los gobiernos a nivel nacional y provincial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 limitaron gravemente la capacidad de las congregaciones religiosas para reunirse en forma presencial, incluso para ceremonias como bodas y funerales. Si bien muchos líderes religiosos avalaron las medidas por atender al interés de la salud pública, el presidente del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR) interconfesional criticó las restricciones del gobierno nacional por no incluir expresamente a los trabajadores religiosos como “esenciales”. En junio el Poder Ejecutivo adoptó formalmente la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (AIMH) y, en septiembre, el Congreso Nacional hizo lo propio. Conforme a los medios de difusión, en julio el presidente Alberto Fernández comunicó a los líderes de la comunidad judía que deseaba ver avances en el enjuiciamiento de los responsables del atentado con explosivos perpetrado en 1994 contra el centro comunitario judío de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en el que perdieron la vida 86 personas. El 23 de diciembre un juez federal absolvió a Carlos Telleldín de participación directa en el atentado. Se esperaban otras apelaciones. En julio el presidente Fernández anunció públicamente que la negación del holocausto “no se

puede tolerar”. El 30 de diciembre los senadores votaron a favor de la legislación para la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación. La Cámara de Diputados había aprobado el proyecto de ley anteriormente ese mismo mes. Figuras religiosas de diversos cultos se opusieron a la legislación.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) notificó 918 denuncias de antisemitismo en 2019, el año más reciente para el cual se contaba con estadísticas, en comparación con 834 notificadas en 2018. Los incidentes notificados con mayor frecuencia que se reflejaron en el informe eran insultos antisemitas en sitios en la web. El 1 de abril las organizaciones judías y el embajador de Israel criticaron comentarios del periodista televisivo Tomás Méndez en los que culpaba a Israel por el virus de la COVID-19; posteriormente Méndez hizo pública una disculpa. En junio un cementerio judío de Rosario (provincia de Santa Fe) sufrió actos de vandalismo, según los miembros de la comunidad que denunciaron el acto. Las comunidades religiosas trabajaron juntas para apoyar a las personas necesitadas a raíz de la pandemia, incluso mediante la iniciativa #SeamosUno por la que se alcanzó la meta de entregar un millón de cajas de comida y artículos de limpieza a fines de septiembre. Grupos interconfesionales, como el Comité Interreligioso por la Paz en Argentina, cuyos miembros incluyen grupos religiosos católicos, protestantes, cristianos evangélicos, judíos, musulmanes, bahaíes e indígenas, así como el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, siguieron abocados a promover la tolerancia y aumentar las oportunidades para la acción interconfesional relativa a los desafíos comunes de la sociedad.

Funcionarios de la embajada estadounidense se reunieron con altos funcionarios de gobierno, pertenecientes a la Secretaría de Culto y la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC), y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para analizar maneras de promover el respeto por las minorías religiosas y contrarrestar la discriminación por motivos de religión. El embajador grabó un mensaje en septiembre para su inclusión en un video producido por la AMIA para honrar la memoria de las víctimas del 11 de septiembre y otro en octubre en el marco de un video conmemorativo organizado por el Congreso Judío Latinoamericano en el aniversario del atentado terrorista de 2017 en Nueva York en el que perdieron la vida cinco ciudadanos argentinos. Funcionarios de la embajada respaldaron la cooperación interconfesional y el respeto universal por la libertad de culto mediante declaraciones públicas y publicaciones en los medios sociales.

Sección I. Demografía religiosa

El gobierno de los Estados Unidos calcula que la población total es de 45,5 millones de habitantes (cálculo a mediados de 2020). Conforme a una encuesta realizada en 2019 por el CONICET, el instituto nacional de investigación del país, el 62,9% de la población es católica; el 15,3% protestante, incluidos grupos evangélicos; el 18,9% no tiene religión, lo cual incluye a los agnósticos; el 1,4% son Testigos de Jehová y pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Iglesia de Jesucristo); el 1,2% pertenece a otra religión, lo cual incluye a musulmanes y judíos; y el 0,3% se desconoce. Hay otras fuentes según las cuales los adventistas del Séptimo Día, los bautistas, los Testigos de Jehová, los luteranos, los metodistas y los miembros de la Iglesia de Jesucristo totalizan en conjunto el 3% de la población. De acuerdo con la AMIA, hay 220.000 judíos en el país, y el Centro Islámico calcula la población musulmana entre 800.000 y 1.000.000. Las comunidades cristianas evangélicas, especialmente los pentecostales, están aumentando, pero no se cuenta con estadísticas fiables. También hay pequeños números de bahaíes, budistas y adherentes de religiones indígenas.

Sección II. Situación sobre el respeto del gobierno hacia la libertad de culto

Marco jurídico

La constitución ampara el derecho de profesar, enseñar y practicar libremente la propia religión. Declara el apoyo del gobierno federal en favor de la “religión católica apostólica romana”, pero la Suprema Corte ha dictaminado que la misma no es religión oficial ni de Estado.

El gobierno otorga a la Iglesia católica subvenciones libres de impuestos, privilegios institucionales tales como subsidios escolares, una importante autonomía a las escuelas parroquiales y preferencias en cuanto al otorgamiento de licencias sobre radiofrecuencias. La ley no exige que la Iglesia Católica se inscriba ante la Secretaría de Culto dependiente del MRECIC. La inscripción tampoco es obligatoria para otros grupos religiosos, pero los que se inscriben gozan de la misma condición y los mismos beneficios fiscales que la Iglesia Católica, incluidas la exención impositiva, la emisión de visados para funcionarios religiosos y la posibilidad de celebrar actividades públicas. Para inscribirse, los grupos religiosos deben tener un lugar de culto, estatutos de la organización y clérigos ordenados, entre otros requisitos. Para acceder a muchos de estos

beneficios los grupos religiosos deben inscribirse también como asociación civil mediante la IGJ.

No se exige inscripción para la realización de servicios religiosos privados, como los celebrados en los hogares, pero a veces se la exige para llevar a cabo actividades en espacios públicos de conformidad con los reglamentos locales. Las autoridades municipales pueden exigir que los grupos obtengan permisos a fin de poder usar parques públicos para eventos y pueden exigir asimismo que los grupos religiosos se inscriban ante la Secretaría de Culto para poder recibir un permiso. Una vez inscrita, una organización debe informar a dicha secretaría acerca de cualquier cambio o decisión importante sobre sus líderes, estructura de gobierno, tamaño de la feligresía y dirección de su sede.

Por ley, el plan de estudios obligatorio en las escuelas públicas es laico. En algunas de ellas, los estudiantes pueden solicitar cursos electivos de enseñanza sobre la religión de su elección, que se pueden impartir en la propia escuela o en una entidad religiosa. Muchos grupos religiosos cristianos, judíos y musulmanes dirigen escuelas privadas, que reciben apoyo financiero si se han inscrito ante el gobierno.

Los funcionarios religiosos extranjeros pertenecientes a grupos religiosos inscritos pueden solicitar una categoría de visado específica para ingresar en el país, cuyo período de validez varía en función de la finalidad del viaje. Los misioneros extranjeros de grupos religiosos inscritos deben presentar su solicitud ante la Secretaría de Culto, que a su vez notifica a las autoridades inmigratorias a fin de pedir la emisión de los documentos pertinentes.

La ley prohíbe la discriminación por motivos de religión, raza, nacionalidad, ideología, afiliación política, sexo, situación económica o social o aspectos físicos y establece que los culpables de actos discriminatorios indemnicen por daños y perjuicios o sean encarcelados. La discriminación también puede ser un factor agravante respecto de otros delitos, con lo cual las penas son mayores. El directorio del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo del gobierno bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, incluye a representantes de los principales grupos religiosos. El INADI investiga los incidentes presuntos y denunciados de discriminación por motivos religiosos; no está autorizado a hacer cumplir recomendaciones o conclusiones, pero sus informes se pueden utilizar como elementos de prueba en los tribunales civiles. El organismo también brinda apoyo a las víctimas de discriminación religiosa y promueve medidas proactivas para

prevenir la discriminación. Asimismo, elabora y distribuye publicaciones para promover la tolerancia religiosa.

El país es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Prácticas del gobierno

Fue escaso el avance para lograr enjuiciar a los perpetradores acusados del atentado con explosivos contra la AMIA en 1994. El 23 de diciembre un juez federal absolvió a Carlos Telleldín de participación directa en ese atentado. Conforme a la acusación formal, Telleldín suministró el vehículo que los atacantes llenaron de explosivos. La AMIA y la DAIA dijeron que apelarían el veredicto. Un vocero de la AMIA afirmó que la comunidad judía del país luchó durante décadas por obtener justicia por las víctimas y llevar este proceso a su fin para las familias y dijo: “la decisión del Tribunal consagra, de manera vergonzante, el camino de la impunidad”. En una entrevista realizada en el mes de diciembre en Radio 10, el presidente Fernández indicó que ahora estaba convencido de que la muerte en 2015 del investigador de la AMIA Alberto Nisman se debió a un suicidio. En un análisis de la escena del delito en 2017 realizado por la Gendarmería del país se concluyó que su muerte fue un homicidio, si bien en un estudio anterior de la Policía Federal se sugirió que Nisman se había disparado.

Según los medios de difusión, en julio Fernández manifestó a líderes de la comunidad judía que esperaba que se llevara a juicio a los responsables del atentado contra la AMIA. El 16 de julio, Fernández participó junto con el director del Instituto Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos del AJC en una conversación virtual con motivo de conmemorarse 26 años del atentado contra la AMIA. Fernández ratificó su compromiso de llevar a la justicia a los responsables y agregó, “somos todos argentinos y cada uno respeta su religión, su culto, su origen”. Afirmó también que el holocausto es algo que no se puede discutir y, agregó, “hay que promover la memoria colectiva para que nunca olvidemos lo que ocurrió y nunca más vuelva a ocurrir”.

Representantes de varios grupos religiosos siguieron afirmando que el requisito del gobierno para los grupos religiosos de inscribirse primero en la Secretaría de Culto y luego en el Ministerio del Interior como asociación civil era redundante y observaron que la Iglesia católica no tenía tal requisito. Los grupos expresaron que estos procesos legales eran requisitos previos para solicitar la situación de exención impositiva, la emisión de visados para funcionarios religiosos extranjeros y permiso para celebrar actividades públicas. Representantes de grupos religiosos

manifestaron que merecían un proceso único, separado del de las asociaciones civiles.

El 3 de agosto, conforme al proceso de inscripción, la IGJ anunció un requisito para que todas las asociaciones civiles y fundaciones tuviesen el mismo número de miembros masculinos y femeninos en sus órganos administrativos y de fiscalización. Varios grupos religiosos y CALIR emitieron comunicados sobre la inconstitucionalidad de este requisito que infringía la libertad de culto. El presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), Rubén Proietti, manifestó a los medios de difusión local que la aplicación del requisito a los grupos religiosos inscritos sería “una intromisión indebida en la organización de las iglesias”.

Algunos grupos religiosos criticaron el decreto que promulgó el gobierno el 20 de mayo por el que estableció restricciones sanitarias en respuesta a la pandemia de la COVID-19 dado que se trató de manera injusta a los trabajadores religiosos como no esenciales, en comparación con médicos, enfermeros, trabajadores sanitarios que prestan servicios domiciliarios y miembros de los servicios de seguridad. La prohibición en el decreto de las reuniones efectivamente prohibió las reuniones religiosas presenciales, entre ellas bodas y funerales, durante varios meses. En agosto, el presidente de CALIR Raúl Scialabba observó los efectos del decreto en la libertad de culto y lo criticó por no incluir expresamente a los trabajadores religiosos como “esenciales”.

Varios líderes religiosos expresaron su apoyo por las medidas relacionadas con la pandemia. Omar Abboud, legislador local y copresidente del Instituto de Diálogo Interreligioso en Buenos Aires, expresó que prevalece el cuidado de la vida y “no se dañó ningún principio de la libertad religiosa” en la ciudad de Buenos Aires. En mayo el Gran Rabino Gabriel Davidovich expidió un comunicado en el que criticaba las bodas celebradas por dos parejas de la comunidad en infracción de la cuarentena, y agregó que su Superior Rabinato no había “avalado ni consentido” ninguna celebración.

Al final del año, la situación de la reapertura específicamente para las instituciones religiosas era diferente según la provincia y la localidad. El 23 de septiembre el gobierno autorizó las reuniones presenciales con fines de culto en la ciudad de Buenos Aires, con un máximo de 20 asistentes y bajo protocolos estrictos. Sin embargo, la provincia de Córdoba suspendió los eventos religiosos en octubre en ciertas zonas tras un aumento en el número de casos de la COVID, una medida a la que la Arquidiócesis de Córdoba se opuso públicamente. En un comunicado, el arzobispo Carlos Nájuez observó

que las iglesias bajo su supervisión observaban cuidadosamente todos los protocolos de salud y seguridad, a lo cual agregó que esperaba que se permitiese a las iglesias ocuparse de la “salud espiritual” de las congregaciones.

El 30 de diciembre el Congreso Nacional promulgó legislación por la que legalizó el aborto hasta la semana 14 semana de gestación inclusive y en etapas posteriores si el embarazo era producto de una violación o si ponía en peligro la vida de la persona que lo gestaba. Figuras religiosas de diversos credos se opusieron a los esfuerzos del gobierno por aprobar la legislación. El 8 de marzo los líderes de la Iglesia Católica celebraron una “misa por la vida” en Luján (provincia de Buenos Aires). En la celebración, el obispo de San Isidro Oscar Ojea dijo en su homilía que “no es lícito eliminar ninguna vida humana”. El 28 de noviembre, grupos provida marcharon en 267 ciudades cuando la cámara baja del congreso comenzaba formalmente el tratamiento de la ley. Cerca de 150 grupos provida respaldaron la marcha, la cual también recibió el apoyo público de ACIERA y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). En noviembre la directora de Bioética de ACIERA, Jael Ojuel, publicó un artículo de opinión en el que afirmaba que la legalización del aborto no era simplemente un “problema de salud pública” y que los grupos provida buscaban proteger tanto a las madres como a sus hijos por nacer.

Numerosos grupos religiosos y provida, entre ellos ACIERA, expresaron preocupación continua por el caso de la detención de un médico en 2017 por rehusarse a realizar un aborto. En marzo un tribunal de impugnación en la provincia de Río Negro confirmó la condena de un año y dos meses de prisión en suspenso por incumplimiento de deberes contra Leandro Rodríguez. La condena lo inhabilitaba para ejercer la medicina durante dos años y cuatro meses. En 2017 Rodríguez trató a una mujer que padecía un fuerte dolor y una infección después de tomar misoprostol, un fármaco para inducir el aborto, en su quinto mes de embarazo. Rodríguez trató la infección e interrumpió el aborto. Tres meses después, la mujer dio a luz al bebé y lo dio en adopción. El equipo legal de Rodríguez indicó que había interrumpido el aborto por motivos médicos y que la paciente aceptó continuar el embarazo y dar al bebé en adopción. Algunos grupos religiosos, entre ellos iglesias cristianas evangélicas locales, dijeron que el caso estableció un precedente contra la objeción de conciencia al aborto.

Representantes de la Iglesia Católica siguieron analizando medidas para reducir el uso de financiamiento federal tras un acuerdo de 2018 entre el gobierno y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en representación de la Iglesia Católica, en el que se delineaba un plan formal de mutuo acuerdo

para reducir el apoyo financiero directo del Estado a la Iglesia. En el marco del acuerdo, el financiamiento del gobierno asignado principalmente a los salarios de los obispos y estipendios para seminaristas disminuyó de 130 millones de pesos (1,46 millones de dólares) en 2018 a 126 millones de pesos (1,41 millones de dólares) en 2019. El 30 de junio la CEA anunció un programa para generar mayores contribuciones privadas hacia actividades de la Iglesia.

De acuerdo con los medios de difusión, en mayo algunos líderes de la comunidad judía se opusieron a la propuesta del gobierno para expedir un nuevo billete de 5.000 pesos en honor de dos médicos reconocidos en la historia, e indicaron que uno de ellos, Ramón Carrillo, fue simpatizante nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Otros grupos judíos, entre ellos la DAIA, indicaron que aguardarían hasta que el gobierno tomara una decisión antes de emitir comentarios sobre el tema. La familia de Carrillo rechazó las acusaciones sobre las perspectivas pronazi de Carrillo y habló de una “campana de desprestigio” en su contra.

El 4 de junio el MRECIC adoptó formalmente la definición de antisemitismo establecida por la AIMH y, el 16 de septiembre, el Congreso Nacional hizo lo propio. El presidente de la DAIA Jorge Knoblovits declaró a los medios de difusión que era “crucial luchar contra el antisemitismo”.

El secretario de Culto Guillermo Oliveri, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, el director general de Entidades y Cultos de la ciudad de Buenos Aires Federico Hernán Pugliese y otros representantes gubernamentales participaron de conferencias sobre libertad de culto, diálogos interconfesionales, ordenaciones de rabinos, servicios católicos y celebraciones de las festividades de Rosh Hashanah, Eid al-Adha y Eid al-Fitr, así como otras actividades religiosas, incluidas las celebradas por las iglesias protestante y ortodoxa. Asistieron virtualmente o por videos grabados a la luz de las restricciones a las reuniones públicas debidas a la COVID-19.

El 13 de mayo, reconocidos bioeticistas en representación de las comunidades católica, cristiana evangélica, judía, musulmana y de la Iglesia de Jesucristo publicaron un documento marco conjunto para asistir a los médicos a realizar triage y a asignar recursos sanitarios escasos ante la situación abrumadora en hospitales o clínicas respecto de los pacientes como resultado de la pandemia de la COVID-19. El 16 de julio la legislatura de la ciudad de Buenos Aires reconoció formalmente el marco.

Sección III. Situación del respeto mostrado por la sociedad hacia la libertad de culto

La DAIA notificó 918 denuncias de antisemitismo en 2019, el año más reciente para el cual se contaba con estadísticas, en comparación con 834 notificadas en 2018. Los incidentes notificados con mayor frecuencia fueron insultos antisemitas publicados en sitios web y medios sociales. Estos incluían comentarios que describían a los judíos como foráneos, propagadores de teorías de confabulación, avaros o explotadores. Se observaron también otros actos que comprendieron grafiti, insultos verbales y la profanación de cementerios.

El 1 de abril, en su programa “Periodismo Federal”, el periodista televisivo Tomás Méndez asoció el origen del virus de la COVID-19 con “los ricos del mundo que nacieron en Estados Unidos e Israel”. La DAIA, el embajador de Israel y el INADI criticaron los comentarios. El 2 de abril Méndez hizo pública una disculpa.

Según informes de los medios de difusión, en agosto aparecieron carteles ,en la ciudad de Neuquén, en el sur del país, en los que se afirmaba “El virus son los judíos” y “Dictadura mundial judía. ¡Argentino, despertate!”. El presidente regional de la DAIA condenó los carteles e instó al gobierno local a investigar y tomar medidas. El 25 de agosto fiscales federales en Neuquén anunciaron una investigación formal, e indicaron que los carteles constituían actos de discriminación punibles con una pena de entre un mes y un año de reclusión.

Tras la muerte de Kobe Bryant y su hija en un accidente de helicóptero en California el 26 de enero, el periodista Salim Sad publicó un tuit, “Helicóptero Sicorsky S 76, de apellido judío, mata a Kobe Bryant”. El tuit fue borrado posteriormente. Sad indicó que alguien había *hackeado* su cuenta; pero, según la DAIA, Sad había publicado anteriormente tuits antisemitas.

En marzo los medios de difusión anunciaron que el futbolista Arnaldo González realizó un gesto antisemita después de ser expulsado de un partido en contra de un equipo que contaba con muchos simpatizantes judíos, lo cual llevó a que se pidiera su enjuiciamiento en el marco de la ley nacional que prohíbe actos discriminatorios. En noviembre la Asociación del Fútbol Argentino rechazó su solicitud de indulgencia y mantuvo una suspensión de 10 partidos en contra de González.

En julio un profesor de la Universidad Siglo 21 de Córdoba dijo a sus alumnos durante una clase virtual que la creación del Estado de Israel fue una concesión al “lobby sionista” a cambio de dinero. Agregó: “¿Chicos: por qué piensan que los nazis mataron a tantos judíos? Por la envidia que tenían. Imagínense ustedes a los alemanes desangrándose en una crisis económica terminal, con una hiperinflación, y [mientras tanto] los judíos... los tipos seguían enriqueciéndose”. Una alumna grabó la clase y entregó la grabación a la DAIA, que presentó una denuncia. Tras investigar el caso, la universidad despidió al profesor.

En octubre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) adoptó la definición de antisemitismo de la AIMH. El presidente de la AFA Claudio Tapia dijo que era parte de una iniciativa más amplia para “combatir el racismo, la discriminación y el antisemitismo”.

En junio un cementerio judío de Rosario (provincia de Santa Fe) sufrió destrozos, según los miembros de la comunidad que denunciaron el acto. El vandalismo comprendió el hurto de decenas de placas y lápidas, así como la destrucción de tumbas. No se detuvo a ningún sospechoso.

En septiembre la DAIA denunció grafiti antisemita en un afiche promocional del programa de radio del periodista Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia. El grafiti incluía la cruz esvástica y palabras antisemitas. La DAIA denunció un ataque similar en un afiche del periodista Baby Etchecopar en julio.

El 28 de septiembre vándalos realizaron pintadas en una iglesia evangélica en Neuquén. Las frases incluían amenazas y acusaciones contra el movimiento provida.

Las comunidades religiosas trabajaron juntas para apoyar a las personas necesitadas como resultado de la pandemia de la COVID-19. Estas labores comprendieron la iniciativa #SeamosUno organizada por el Centro de Investigación y Acción Social jesuita en colaboración con Cáritas, ACIERA, AMIA y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, entre otros. Al 30 de septiembre la organización había entregado un millón de cajas de alimentos y productos de limpieza.

Grupos interconfesionales como Religiones para la Paz en Argentina, cuyos miembros incluyen grupos religiosos católicos, protestantes, cristianos evangélicos, judíos, musulmanes, bahaíes e indígenas, así como el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, siguieron abocados a aumentar las oportunidades para la acción interconfesional respecto de los desafíos comunes de la sociedad. En septiembre organizaron una serie en línea con

oradores en una universidad local para compartir las perspectivas de varios líderes religiosos sobre la vida y el culto durante y después de la pandemia de la COVID-19.

En febrero el Centro de Investigaciones Pew publicó conclusiones sobre las actitudes respecto de los principios democráticos, como elecciones periódicas, libertad de expresión y sociedad civil libre, así como libertad religiosa, en 34 países, sobre la base de entrevistas que realizó en su *Spring 2019 Global Attitudes Survey*. Conforme a las conclusiones, el 74% de los entrevistados del país consideraban la libertad de culto “muy importante”, en una posición alta entre los nueve principios democráticos abordados en la encuesta.

Sección IV. Política e interacción del Gobierno de los Estados Unidos

Funcionarios de la embajada de los Estados Unidos se reunieron con representantes del gobierno, incluidos el secretario de Culto, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para analizar maneras de promover el respeto por las minorías religiosas y la cooperación entre las distintas religiones. En reuniones con funcionarios del gobierno, el embajador y otros funcionarios de la embajada abordaron la tolerancia, el movimiento interconfesional en el país y medidas para contrarrestar la discriminación religiosa.

La labor de interacción de la embajada siguió en forma virtual después de la imposición de restricciones por parte del gobierno a las reuniones públicas debido a la pandemia de la COVID-19. En julio el embajador asistió a una conmemoración en línea para honrar la memoria de las víctimas del atentado terrorista de 1994 en contra de la AMIA. Asimismo, grabó un mensaje en septiembre como parte de un video producido por la AMIA en memoria de las víctimas del 11 de septiembre y otro en octubre destinado a un video conmemorativo organizado por el Congreso Judío Latinoamericano que marcó el aniversario del atentado terrorista en 2017, en Nueva York, en el que perdieron la vida cinco argentinos. En febrero un alto funcionario de la embajada se reunió con el Comité Judío Americano de Distribución Conjunta para analizar el estado de la libertad de culto en el país y las maneras en las que la embajada podría sustentar a las comunidades de todos los credos.

El trabajo de extensión de la embajada comprendió conversaciones virtuales con líderes religiosos y de la comunidad, entre los que se encontraban los de la DAIA, la AMIA y el Centro Islámico. En las reuniones, funcionarios de

la embajada analizaron la situación de la libertad de culto y el diálogo interconfesional y maneras de promoverlos. Funcionarios de la embajada se reunieron con grupos religiosos y ONG centrados en el trabajo social y el servicio a la comunidad (por ejemplo, #SeamosUno) y analizaron la promoción del respeto por la diversidad religiosa, así como respuestas basadas en la fe a la pobreza, la drogadicción, la violencia doméstica, la falta de vivienda y la desnutrición.